

Neoliberalismo y estado de excepción de izquierda en México

Ariadna Estévez

El primer gran teórico de la estrategia militar, Carl Von Clausewitz, dijo que la guerra era una cuestión de violencia y azar, pero sobre todo era la continuación de la política por otros medios. El filósofo francés Michel Foucault decía que, por el contrario, la política era la continuación de la guerra por otros medios y por eso el derecho era una herramienta fundamental para darle esa fachada de paz a la política, entendida desde entonces como la relación amigo-enemigo. El entendimiento foucaultiano de la política como una forma legal de continuar la guerra y establecer reglas al juego amigo-enemigo pone en duda la mera existencia de la paz, que no sería más que la manifestación no violenta de la guerra. Un estado de excepción democrático funcional al neoliberalismo.

El filósofo italiano Giorgio Agamben dice que en el neoliberalismo hay un estado de excepción permanente en el que el derecho garantiza la suspensión de garantías sin que eso signifique la interrupción de la democracia. La suspensión de garantías en la democracia se da a través de reformas legales y la presencia de las fuerzas armadas. El estado de excepción permanente es común tanto en el neoliberalismo de derecha como de izquierda. Así es: el neoliberalismo no es opcional. Tanto la izquierda como la derecha suscriben el neoliberalismo, sólo que la primera lo hace a nombre de la soberanía nacional, los intereses económicos de la nación y el pueblo, y la segunda a nombre de la libertad, la propiedad privada y el mercado.

En ambos casos, el interés fundamental es facilitar el capitalismo extractivista y el criminal, y hacer uso de la acción legislativa y de las fuerzas armadas para garantizar esas

actividades. En conjunto, el derecho y las fuerzas armadas -el estado de excepción permanente- garantizan que las fuerzas productivas y financieras del libre mercado operen con poca oposición, sin importar que se trate de un gobierno de izquierda o de derecha.

El estado de excepción de izquierda

La instalación del estado de excepción permanente inició en México desde hace décadas, pero ha tenido su expresión más absoluta y extensa, en el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador. La militarización del espacio civil empezó a partir del levantamiento armado zapatista en 1994 por órdenes del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). A pesar de la alternancia partidista del poder, el ejército se afianzó en el gobierno del presidente derechista Vicente Fox (2000-2006) quien nombró a un general como procurador general de la República. La militarización de las actividades policiacas se extendió durante la administración del también derechista Felipe Calderón (2006-2012), quien declaró la “guerra contra el narcotráfico” y para ese propósito puso 50 mil efectivos militares en los estados de Morelia, Chihuahua y Tamaulipas, con un saldo de 102 mil muertos y 17 mil desaparecidos. Su sucesor, el centrista Enrique Peña Nieto (2012- 2018) siguió la estrategia militarizada del combate al narcotráfico y subió el número de soldados en las calles a 150 mil. Las muertes se incrementaron a 130 mil y los desaparecidos a 35 mil.

Sin embargo, el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador aún sin concluir su mandato (2018-2024), ha superado por mucho las cifras de muerte de sus antecesores: el total de desaparecidos sin que haya concluido el sexenio suma ahora 105 mil (74% hombres y 24% mujeres), y de asesinados más de 350 mil, incluyendo feminicidios y homicidios. Las cifras no incluyen las de la “guerra contra el narcotráfico” pues el presidente de izquierda se negó a seguir la misma línea militarizada y securitista de la lucha

antinarcóuticos, aunque el número de militares en las calles asciende ahora a 150 mil. El presidente López Obrador ha colocado a militares en áreas civiles en las que ni el centro ni la derecha se atrevieron: policías, aduanas, comunicaciones y transportes, ciencia y tecnología, turismo, control aeroportuario, y migración.

El estado de excepción permanente en México es más extenso y copioso que nunca a manos de la izquierda. Todo empezó con la creación de la Guardia Nacional en marzo de 2019, como parte de la estrategia nacional de seguridad. Si bien se estableció que era un organismo civil que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta que estuviera suficientemente profesionalizada para operar sin ayuda del Ejército y la Marina. En junio de 2019 el presidente acordó con el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump que enviaría seis mil miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur de México para impedir el avance de migrantes forzados hacia Estados Unidos, criminalizando de facto la migración que por ley es una infracción administrativa. Según cifras del gobierno del presidente López Obrador, para finales de 2020 había casi 100 mil efectivos de la Guardia Nacional, de los cuales 76% pertenecían al Ejército y la Marina, apostados sobre todo en puertos aéreos, marítimos y terrestres para detener a migrantes, llevar a cabo labores de aduana y vigilar garitas.

En 2020 se publicó un decreto mediante el cual se autorizaba no sólo a la Guardia Nacional sino a las fuerzas armadas en su conjunto a participar en la seguridad pública de manera extraordinaria hasta 2024. En 2021 la Cámara de Diputados aprobó la inclusión de las fuerzas armadas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y a inicios de 2022 el presidente anunció que una empresa militar llamada Olmeca Maya Mexica operaría los aeropuertos de santa Lucía y de Tulum, Chetumal y Palenque, así como el Tren

Maya. Ningún gobierno de centro o derecha le había dado tanto poder al sector militar en México, que se había distinguido de los ejércitos latinoamericanos por tener un régimen social y jurídico diferente que les daba las canonjías necesarias para permanecer en los cuarteles y someterse al poder civil. Este poder se consagró en septiembre de 2022 cuando el Congreso mexicano aprobó una reforma mediante la cual se extiende el tiempo durante el cual las fuerzas armadas están a cargo de la Guardia Nacional y participando en labores de seguridad pública de 2024 a 2028.

En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había criticado el uso de las fuerzas armadas para seguridad pública diciendo que el acuerdo faltaba al principio de la certeza jurídica porque no había claridad sobre los supuestos en los cuales se enmarcaba la actuación las fuerzas armadas. En 2022, cuando la presidencia de la Comisión estaba ya a manos de una persona nombrada por el Congreso controlado por el partido del presidente, María Rosario Piedra Ibarra -hija de Rosario Ibarra de Piedra, la madre de un desaparecido de la Guerra Sucia de los 1970s-, la posición fue de abierto apoyo a la extensión de la militarización de la seguridad públicas y otras áreas civiles hasta 2024. La presidencia del ombudsman mexicano dijo que la situación de emergencia y excepcionalidad que llevaba a las reformas justificaba la extensión del periodo, y la Comisión las avalaba porque no tenía duda de las reformas eran a favor del “pueblo”. Sin reconocer que la militarización de la esfera civil era per se un peligro para los derechos humanos como ya había expresado la ONU y las organizaciones civiles mexicanas, la Comisión se limitó a decir que vigilaría que las fuerzas armadas respetaran los derechos humanos.

El estado de excepción en México es más amplio que nunca gracias a la izquierda mexicana y se le ha criticado por optar por medidas que son de derecha por definición. Esto

es un error: la izquierda no está en contra de la militarización legal como parte de una política que es la extensión de la guerra. La mayoría de los golpes militares en América Latina han sido de derecha (Chile, Argentina, Brasil), pero la izquierda guerrillera y revolucionaria siempre ha usado estrategias militares para lograr sus fines, como se ha visto en el caso de la Revolución Cubana y las guerrillas colombianas, peruanas y mexicanas. En el libro *La Utopía Desarmada*, el politólogo Jorge G. Castañeda advertía desde principios de los 1990s que la izquierda no tiene una vocación democrática natural, y que su adopción de discursos de derechos humanos y elecciones democráticas respondían instrumentalmente a sus fines de garantizar el bienestar del “pueblo”, un eslogan que justifica cualquier acto autoritario con el supuesto fin mayor de sacar de la pobreza a las mayorías pauperizadas.

La izquierda mexicana en el gobierno es el claro ejemplo de lo que criticaba Castañeda, quien hacía una lista de pendientes en los que la izquierda debía enfocarse para trascender sus limitaciones frente al régimen democrático, entre los que se incluía luchar contra la impunidad y el deterioro social provocado por la instalación del modelo político-económico neoliberal. En el gobierno, la izquierda mexicana no está luchando contra el autoritarismo como se ha demostrado con la militarización sin precedentes que ha encabezado. Tampoco se opone al neoliberalismo.

Militarización y neoliberalismo de izquierda

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es tan depredador de la vida como los gobiernos de derecha y centro que lo han precedido. La política de subsidios a adultos mayores, jóvenes y mujeres jefas de familia es una forma de asegurarse apoyo popular mientras pauperiza y explota a la burocracia de a pie quitándoles prestaciones y recortando salarios. No se crean plazas, sino que se contratan personas por honorarios o “apoyos”,

haciéndolas usar sus propios recursos (celulares, datos y transporte). Estas medidas que van contra el bienestar del pueblo al que dice representar no son diferentes de las medidas de adelgazamiento del Estado implementadas por la derecha y la centro-izquierda. De forma paralela, las fuerzas armadas liderean proyectos económicos que perjudican el medio ambiente y las comunidades, reprimen a migrantes africanos y centroamericanos, y toman control de los órganos que denuncian y los científicos que los acusan. Simultáneamente se tiene una conducta permisiva contra la delincuencia organizada. Estas medidas no difieren mucho de las implementadas por la derecha y la centro-izquierda en sexenios anteriores, en las que la militarización y la supuesta persecución a criminales eran una puesta teatral para dejar crecer otros nichos de la delincuencia y la industria extractiva.

Un caso ejemplar de estado de excepción y neoliberalismo de izquierda es la presencia de las fuerzas armadas en el estado de Chiapas, cuna del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un ícono de la izquierda mexicana. Como se mencionó arriba, por órdenes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, en 2019 el presidente mexicano envió seis mil miembros de la guardia nacional a detener migrantes en la frontera con Guatemala. Cuatro meses después de la orden de Trump de apostar la Guardia Nacional en la frontera sur, el 13 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Migración lideró un operativo compuesto por miembros de la Guardia Nacional y la Policía Federal para impedir el avance de una caravana migrante proveniente de Tapachula. Tan solo cuatro días después, el 17 de octubre, la Guardia Nacional localizó a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en una vivienda de Culiacán, Sinaloa, pero lo liberaron luego de que se desataran balaceras en la ciudad. Mientras no se usó a la Guardia Nacional contra un criminal sí se hizo para detener migrantes. Para 2022 la Guardia Nacional tenía ya 24 cuarteles en Chiapas. Sin

embargo eso no ha impedido que el enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada como los ocurridos en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, a principios de octubre de 2022. El gobierno mandó 300 elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

La presencia de las fuerzas armadas en Chiapas para detener migrantes y repeler a delincuentes de la forma que no se hizo en Culiacán en 2019, no es ajena a actividades económicas y represivas que involucran a las fuerzas armadas, en particular el Tren Maya. El 13 de abril 2021, el Conacyt dio a conocer un informe prospectivo sobre los potenciales daños de este proyecto al medio ambiente y las comunidades indígenas, titulado *Territorios Mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles*. Elaborado por 30 científicos, se advertía que el Tren Maya afectaría diez áreas naturales protegidas, destruiría 1,288 sitios arqueológicos, afectaría los derechos de 146 mil indígenas, facilitaría la trata de personas y el tráfico de drogas. En abril de 2021 la Cámara de Diputados aprobó la inclusión de las fuerzas armadas en el Conacyt y en septiembre de ese año la Fiscalía General de la República dio a conocer que demandaba a 31 científicos de ese órgano científico por supuesta desviación de fondos y delincuencia organizada

La violencia de Estado, criminal e híbrida, típica del estado de excepción de la guerra contra el narco en el norte del país de 2006 a 2018, llegó al sureste, a Chiapas, con todo y las prácticas neoliberales de la izquierda y la derecha de explotación de recursos e instrumentalización de la violencia para acabar con la oposición al Tren Maya y el proyecto turístico de las fuerzas armadas, ya sea por asesinato o desplazamiento, como ocurrió en Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero en sexenios anteriores. El neoliberalismo de izquierda es igual de corrosivo y aniquilador de la vida como el de derecha y centro.

Referencias

<https://www.milenio.com/policia/culiacan-dejan-libre-hijo-chapo-salvaguardar-ciudadanos>

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sedena-despliega-300-elementos-del-Ejercito-y-la-Guardia-Nacional-en-Chiapas-tras-enfrentamientos-20221012-0094.html>

<https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/06/14/mexico-guerra-narcotrafico-calderon-homicidios-desaparecidos/>

<https://www.univision.com/noticias/america-latina/cifras-record-de-asesinatos-desapariciones-e-impunidad-el-balance-que-deja-pena-nieto-al-terminar-mandato>

<https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/100012-desaparecidos/>

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aumentan-reportes-de-desapariciones-con-AMLO-20220828-0091.html>

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aumentan-reportes-de-desapariciones-con-AMLO-20220828-0091.html>

<https://www.animalpolitico.com/2022/02/empresa-militar-aeropuertos-tren-maya-amlo/>

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sedena-despliega-300-elementos-del-Ejercito-y-la-Guardia-Nacional-en-Chiapas-tras-enfrentamientos-20221012-0094.html>

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sedena-despliega-300-elementos-del-Ejercito-y-la-Guardia-Nacional-en-Chiapas-tras-enfrentamientos-20221012-0094.html>